

Titulo de la Investigación:

“Convenio Multilateral: Armonización del marco normativo de aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos”

Alcance: El análisis se limita a la aplicación del convenio por contribuyentes que tributan bajo su Régimen General.

Objetivo del cuestionario: Obtener información basada en la formación y experiencia del especialista en materia fiscal.

Nombre del especialista: Martín Righetti – Gerente Impuestos Deloitte S.A.

1) Considerando la creciente cantidad de casos elevados a las comisiones en la ultima década. ¿Cuáles son las causas que destacaría como principales en cuanto a su carácter de generadoras de controversias?

En mi opinión, en estos últimos años se ha visto una creciente intervención de los Organismos de aplicación del Convenio Multilateral (Comisión Arbitral y Plenaria) principalmente en dos cuestiones:

a) Jurisdicción a la que corresponde atribuirle los ingresos:

Ha existido un sinnúmero de planteos de parte de los contribuyentes del gravamen respecto a las pretensiones de las diferentes jurisdicciones de desconocer los criterios aplicados para la asignación de los ingresos a una u otra provincia a los fines de determinar los coeficientes unificados.

Dicha controversia ha generado un vaivén de interpretaciones en relación a qué jurisdicciones se le deben atribuir los ingresos cuando el texto del Convenio menciona que a los fines de calcular el coeficiente unificado, el 50% se calculara en proporción a los ingresos brutos “*provenientes de cada jurisdicción*”.

Así, se han presentado casos en los que los Organismos han resuelto la cuestión aplicando diversos criterios: lugar de entrega, lugar de concertación, domicilio del comprador, realidad económica

b) Ámbito Municipal: Sustento territorial y Atribución de Ingresos

Por una necesidad imperiosa de incrementar los fondos de las arcas municipales, se ha visto una tendencia creciente en los casos planteados ante las Comisiones, relativa a las potestades tributarias de los municipios para el cobro de las tasas.

Principalmente han sido dos las cuestiones que han generado la activa participación de estos organismos de contralor.

Por un lado la existencia de sustento territorial para que los municipios puedan exigir el cobro de sus tasas (cuestión ya resuelta por nuestra suprema Corte de Justicia en Laboratorios Raffo S.A. c/ Municipalidad de Córdoba), y por otro lado la mecánica a

aplicar para atribuir los ingresos provinciales entre los diferentes municipios entre los cuales los contribuyentes ejercen su actividad (aplicación del 2° o 3° párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral).

2) Partiendo del propósito de coordinación y armonización del Convenio. ¿Cómo calificaría la gestión de los organismos de aplicación del convenio en la última década?

Desde el punto de vista de la cantidad de resoluciones emitidas, puede decirse que los Organismos de aplicación han tenido una participación activa en este último tiempo (en promedio fueron un poco más de 50 las resoluciones emitidas por la Comisión Arbitral en cada año y un poco más de 25 las de la Comisión Plenaria).

Si bien se observa una activa participación de estos Organismos, no debe perderse de vista que los mismos tienen por finalidad interpretar las normas del Convenio y resolver las cuestiones sometidas a su consideración, razón por la cual, atento al sinnúmero de casos en los que han intervenido estas Comisiones, en mi opinión lejos de cumplir con su finalidad, han sido –en gran parte– las generadoras del estado de inseguridad que hoy poseen los contribuyentes y que los coloca en una situación de total incertidumbre en cuanto a los criterios a aplicar.

3) Teniendo en cuenta la complejidad actual de las operaciones. ¿Considera que el contribuyente dispone de fundamentos sólidos a la hora de defender su criterio de asignación de ingresos?

En mi opinión, a la luz de las nuevas formas en la que se ejerce el comercio y se entablan las negociaciones, las nuevas reglas de juego dispuestas por los diferentes estados, hacen que el texto del convenio haya quedado desactualizado y no cumpla cabalmente con la finalidad de evitar la doble o múltiple imposición por parte de los fiscos provinciales, ello por cuanto el contribuyente no posee reglas de juego claras en relación con los criterios a aplicar en la asignación de sus ingresos.

Prueba de esto son por ejemplo algunos de los insólitos casos en los que las Comisiones han resuelto de forma “diferente” para un “mismo contribuyente”, según sea la jurisdicción que intervenía en la controversia relativa al criterio a aplicar para la asignación de los ingresos (lugar de entrega o del domicilio del comprador).

4) ¿Considera que existe una tendencia hacia la unificación de criterios respecto a la asignación de ingresos y gastos que deriva del artículo 2 del Convenio?

En el caso particular de la asignación de los ingresos, por los motivos expuestos en el punto anterior considero que no existe una tendencia clara hacia la unificación de criterios.

Es así que la sola mención en el texto del Convenio de que el 50% se calculara en proporción a los ingresos brutos “*provenientes de cada jurisdicción*” no es suficiente si no existe algunos parámetros más objetivos que le den algo de certidumbre al contribuyente de que una vez aplicado un criterio no se encuentre “sometido” a la

voluntad de 24 jurisdicciones, con 24 interpretaciones diferentes, tratando de atribuirse cada uno la mayor parte posible de los ingresos de los contribuyentes.

Sin perjuicio de ello, en relación con los criterios de atribución de gastos, entiendo que más allá de algunos casos específicos en cuanto a su definición como gasto computable o no computable, existe algo más de claridad para el contribuyente al momento de identificar a qué jurisdicción deben ser atribuidos los mismos.

Prueba de ello es la relativa escasa intervención que han tenido los Organismos del Convenio en estos últimos años en cuanto a dilucidar a que jurisdicción debían ser atribuidos los gastos inherentes al ejercicio de la actividad del contribuyente.

5) ¿Qué alternativa/s propondría para alcanzar una pacífica aplicación del texto de 1977?

Considerando que las actuales normas son insuficientes para establecer de qué jurisdicción proceden los ingresos brutos de un contribuyente, obligando a una asidua intervención de los Organismos de aplicación, cabría preguntarse cual es la razón por la cual las 24 jurisdicciones no son capaces de ponerse de acuerdo en adecuar el actual texto del Convenio?

La respuesta parece mas que obvia, atenta contra los intereses particulares (recaudación???) de cada una de ellas. Es preferible el actual estado de incertidumbre que les brinda la poca claridad en las normas, por cuanto les permite constantemente desconocer los criterios aplicados por los contribuyentes.

Es así que una alternativa podría ser implementar las modificaciones sugeridas en la reuniones realizadas en Córdoba durante 1988 en la que se sugerían incorporar en el texto del Convenio “reglas” para la localización de los ingresos, lo cual si bien seguramente no contemplaría las múltiples y variadas situaciones de la realidad, por lo menos permitiría tener algunos lineamientos que no resulten afectados por la simple interpretación de los Organismos de Aplicación, los que dicho sea de paso son modificados de una día para otro sin el más mínimo sentido de razonabilidad.

6) Incorporando al análisis la realidad de nuestro Estado Federal. Usted coincide en que la problemática de aplicación de este emblemático acuerdo interjurisdiccional es impulsada: (Elija una alternativa)

a) **En mayor parte por la desigualdad de oportunidades e intereses entre las provincias.**

b) En mayor parte por la existencia de una técnica fiscal ineficiente.

c) Solo por la ineficiencia técnica.

d) Solo por las desigualdades provinciales.

e) Por ambas circunstancias en igual medida.

f) No coincido y creo que es impulsada

por:.....
.....